

EL MERCANTIL ESPAÑOL.

AÑO I.

DIARIO DE LA TARDE.

NUM. 15.

PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DE ESPAÑOL Y DE SU DIRECTOR.

IMPRESA Y ADMINISTRACION

Calle de los 33 número 83.

MONTEVIDEO, JULIO 17, 18 Y 19 DE 1861.

Director redactor—D. MANUEL ALFAGEME de la OLIVA.

SUSCRIPCION.

Por mes 1 y 1/2 mrs., por tres meses 4 1/2 mrs., por año 16 1/2 mrs.

El pago de la suscripción se adelantará.

Las solicitudes que se dirijan a este diario deberán ser firmadas por persona que tenga responsabilidad con arreglo a la Ley y se pagarán al entregarlas así como los avisos y anuncios.

La suscripción a este diario provisoriamente se recibe en la Imprenta, calle de los Treinta y Tres núm. 83, y en la Librería Española de Real y Prado, calle de Misiones núm. 125.

Los avisos y solicitudes se reciben en la precitada imprenta hasta las dos de la tarde, pagándose al acto de entregarlos.

ALMANAQUE.

Hoy Martes 19, santas Justa y Rufina mártires.

ADMINISTRACION GENERAL DE COBRES.

Salidas y llegadas de los Correos del Interior de la República.

Para las Piedras, Canelones, Santa Lucía, San José, Dolores, Soriano, Mercedes, Pando, Maldonado, San Carlos y Rocha los 4 11 y 21
Para la Florida, Durazno, Tacuarembó, Pando y Minas los 11 y 27
Para Cerro Largo, Artigas y Treinta y Tres los 9 y 21
Para Santa Lucía, San José, Rosario, Guayabito y Canelón los 4 16 y 28
Para Santa Lucía, San José y Pando los 1 11 y 21

ENTRADAS.

De las Piedras, Canelones, Santa Lucía, San José, Dolores, Soriano, Mercedes, Pando, Maldonado, San Carlos y Rocha los 2 12 y 22
De la Florida, Durazno, Tacuarembó, Pando y Minas los 8 y 24
Del Cerro Largo, Artigas y Treinta y Tres los 8 y 23
De Santa Lucía, San José, Rosario, Guayabito y Canelón los 3 13 y 23
De Santa Lucía, San José y Pando los 8 18 y 28

NOTA.—Se previene al público que hasta el 31 del corriente, las hajillas se cerrarán las cinco de la tarde, desde el 1.º de Abril al 30 de Setiembre a las cuatro. Después de estas horas, las cartas que se echen en el buzón de esta Administración General, quedarán detenidas hasta el próximo correo.

Montevideo, 7 de Marzo de 1861.

Francisco Echegaray.

NEUO ITINERARIO

De las salidas y entradas de las Diligencias a la Capital.

SALIDAS.

San José por Santa Lucía los 2 7 12 17 22 y 27
Durazno por Florida los 5 12 20 y 25
Tacuarembó por Florida y Durazno los 12 y 25
Rocha por San Carlos y Maldonado los 5 15 y 25
Para Artigas por Cerro Largo los 10 y 25

ENTRADAS.

San José por Santa Lucía los 4 9 11 12 21 y 29
Tacuarembó por Durazno y Florida los 8 y 24
Minas por Pando los 6 y 20
Durazno y Florida los 2 9 17 y 25
De Rocha, Maldonado y San Carlos los 2 12 y 22
De Artigas y Cerro Largo los 8 y 23

NOTA.—La Agencia se cerrará a las 7 y media de la noche y hasta esa hora solo se recibirá la correspondencia, encomiendas y equipajes.

MOVIMIENTO DE PAQUETES.

Salidas para B. Aires y vapores del Uruguay.

Los lunes—Vapor Tívoli, regresa los viernes—Zavala 13 Los jueves—Jury los viernes—Misiones 2 Los viernes—Silo los sábados—Zavala 15.

El paquete francés Sistrone llega de Río Janeiro a este puerto los 12 de cada mes y sale los 13.

El paquete inglés Jersey, llega de Río Janeiro a este puerto los 12 de cada mes y sale los 20.

Paquetes brasileños—Salen de Río Janeiro el 6 de cada mes y llegan a este puerto el 12 y el 13, regresando 24 horas después.—Tocan en Río Grande, Porto Alegre y Santa Catalina.

Paquetes para vapores—Llegan a Buenos Aires los 13 y 27 de cada mes, regresando a la Asunción al día siguiente de la llegada de los paquetes de Europa 4 días después.

EXTERIOR.

ESPAÑA.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

Presidencia del Sr. D. Antonio de los Ríos y Rosas.

Sesión del Jueves 2 de Julio de 1861.

El Sr. Presidente: Discusión del dictamen y voto particular relativo a la nacionalidad de los hijos de españoles nacidos en las repúblicas americanas.

Se leyó dicho dictamen y voto particular. (Véase el Apéndice décimo al Diario núm. 132, sesión del 25 de Mayo).

El Sr. Presidente: Abrese discusión sobre el voto particular.

El Sr. Malata tiene la palabra primero en contra.

El Sr. Malata: Sr. Diputado: me cabe la honra de dirigirme por la vez primera la palabra, y reclamo sinceramente vuestra indulgencia. Sin ella, bastaría para mí desaliento la materia de que tratamos, grave como todas las que se rozan con las relaciones mutuas de los pueblos, y árida y difícil como contraindica a estrechar los vínculos que nos unen con las que fueron un día nuestras colonias y ahora llamamos repúblicas hispano americanas. A estos inconvenientes se agregan los que proceden del voto particular de que acaba de darse lectura, y en el cual se levanta la cuestión, en mi humilde concepto con grande importancia, y por lo mismo se ilustra autor, por una parte a las altas y tempestuosas regiones del poder constituyente, mientras por la otra se la rebaja al nivel de un punto de derecho civil, y no por cierto de la mas elevada importancia.

De todo debo hacerme cargo. Necesito pues de vuestra benevolencia y no creáis que en invocarla me proponga entrar en largas digresiones sobre la extensión y los límites de los

poderes públicos según su índole y naturaleza; trato de hablar concretamente y solo lo bastante para llevar alguna luz al debate; vosotros diréis en su vista si nos era dado a los individuos de la comisión renunciar a nuestras propias convicciones y aceptar las del voto particular, dejando asentado un precedente que no debe consentir ningún cuerpo político, ningún gobierno, si no quiere mantener expuesto el país a una continua alarma y verse a sí mismo abocado a las mas perniciosas consecuencias.

Vengamos a los hechos, presentémosles con la fidelidad debida, para venir a resolver las cuestiones que arrojan de sí.

Hallábase el gobierno celebrando un tratado con la República Argentina, cuando se presentó la cuestión de nacionalidad, que por desgracia no permitía una solución conciliable, atendido el texto de ambas Constituciones, la de aquel país y la del nuestro.

El gobierno, lleno de circunspección, suspendió las negociaciones ulteriores, y creyó oportuno consultar al Consejo de Estado. El Consejo, hecho cargo de la cuestión, y exalta recieniendo con la superioridad de sus luces, fué de dictamen que debía acudirse a los cuerpos colegisladores con un proyecto de ley, que en efecto se presentó al Senado y después de aprobado vino al Congreso, nombrándose en su consecuencia la comisión que formamos los individuos que ocupamos este banco, y a cuyo nombre me ha cabido la honra de llevar la palabra. Esta comisión tiene el disgusto de no presentarse unida y compacta ante el Congreso. Seis de sus individuos están conformes en una misma idea, es decir, con el proyecto venido del Senado; uno solo, el señor Rivera, ha tenido por conveniente formar voto particular, y es el que acabo de poner a discusión.

Este voto, señores, es muy largo; y no lo digo en tono de censura, porque todos sabemos que los votos particulares tienen que redactarse con mas extensión que los proyectos de la mayoría; lo digo meramente como quien refiere un hecho y nada mas. Repito que es muy largo, pero en cambio es muy fácil de extender, sobre todo si se atiende a las bases, el voto habrá desaparecido como por sí mismo, falta de apoyo y pedestal.

Base primera. Dice el Sr. Rivera estar plenamente conforme con los designios del Gobierno, en cuanto al fin a que se dirige la autorización que pide. “Esta desconformidad”, dice literalmente, no procede de que el infrascripto impugne el fin a que el proyecto se encamina por el contrario, el infrascripto entiende ser conveniente a los intereses de la España restringir un orden de cosas según el que la nación española tiene grandes deberes que cumplir con relación a sus súbditos domiciliados en las repúblicas americanas, sin que por parte de estos se reconozca obligación alguna en favor del pabellón cuya protección invocan meramente cuando conduce a sus intereses privados.”

Base segunda. Contravención a la Constitución de la monarquía española. Pretende el Sr. Rivera que adolece de este gran vicio la autorización pedida; añade que es imposible concederla, y explana su pensamiento por estas textuales palabras:

“El proyecto de ley aprobado por el Senado reconoce en su art. 1.º que esta cualidad de español “es un derecho que deberá conservar el Gobierno siempre que sea posible, en cuanto a los convenios celebrados sobre este particular con las repúblicas americanas; deduciéndose forzadamente de esta locución, y del texto clarísimo del art. 2.º, que cuando sea imposible conservar y garantizar aquel derecho a los hijos de padre o madre españoles nacidos en América, por ser incompatible con las constituciones hoy vigentes en aquellas repúblicas, el Gobierno español podrá tratar despojando de su nacionalidad a todos los españoles nacidos en América, entre tanto que no abandonen el suelo donde nacieron.”

Base tercera. Que en consecuencia, el punto de que se trata es de la competencia de Cortes constituyentes; de manera que solo reuniendo un Congreso con esta calidad, pueden llevarse adelante los designios del Gabinete. Así dice el Sr. Rivera en su voto particular.

“El autor del presente voto tiene el profundo convencimiento de que, según la organización política de España, el poder legislativo no alcanza a conceder al Gobierno la autorización que este pretende en el proyecto de ley aprobado por el Senado. Si no está equivocado, las Cortes con el Rey tienen la potestad de hacer leyes en armonía con los principios reconocidos en la Constitución; además pueden desenvolver naturalmente los derechos declarados en la Constitución misma, pero carecen de autoridad para hacer leyes derogatorias de aquellos derechos, y cualquier acto de esta especie envuelve, a juicio del infrascripto, una invasión del poder constituido sobre el poder constituyente. Los preceptos constitucionales son al orden político lo que la ley natural al orden moral: sus prescripciones constituyen reglas permanentes, inmutables para gobernantes y gobernados, y quien vá contra ellas

altera el orden moral ó el político de la sociedad.”

Y por fin la última base, que podemos llamar cuarta, es el proyecto mismo de ley que presenta en su voto particular el Sr. Rivera, y que trata de ofrecer al Gobierno en vez de la autorización que este solicita. Esta base comprende multitud de disposiciones que no interesa examinar ni siquiera tomar en cuenta ni ahora ni luego; pues una vez destruidas las bases antedichas y estando el Sr. Rivera conforme con los designios del Gobierno, demostrando que son imaginarios los obstáculos que le apartan del voto de la mayoría, dicho se está que este debe prevalecer.

El Congreso acaba de oír por su orden los fundamentos de la oposición del Sr. Rivera; yo consultando el método, creo oportuno empezar por el tercero de esos fundamentos mismos, es decir, por el que niega a este cuerpo toda autoridad para discutir y deliberar sobre el punto de que se trata, y reserva tales facultades a las Cortes constituyentes.

¿Cortes constituyentes? ¿Ha examinado el Sr. Rivera, ha reflexionado sobre el alcance de esas palabras y sobre las ideas que envuelven? Señores: excepto en los casos de Carta acordada reservada al poder constituido existente, los poderes constituyentes son producto siempre de grandes calamidades públicas. Cuando rotos los vínculos de toda subordinación, vendida toda autoridad, y presentando al Estado la verdadera imagen del caos, el instinto de conservación, que alcanza a la sociedad como a los individuos, hace que del seno mismo del desorden, broten los poderes que han de volver a traer la armonía y el concierto, ese orden y concierto perdidos y que no hay otro medio de readquirir. De otra manera, ni yo ni nadie creo que pueda concebir la existencia de poderes constituyentes.

Pues bien: el Sr. Rivera quiere este medio de convocación? ¿Quiere que abrumemos al país bajo el peso de los horribles males a que acabo de hacer alusión, para de esa manera legítimar la aparición del poder constituyente? No ofenderé al Sr. Rivera su suponiéndole insensible ó indiferente a tantos desastres, ni menos atribuyéndole tales principios. Pues bien; si el señor Rivera no quiere nada de esto, yo estimaría que S. S. no dijera franca y sencillamente donde encierran quicio conveque, legítimamente ese poder superior al poder constituido, quien nombra a los que han de elegirle, y sobre todo, como se concilia la existencia simultánea de una sociedad constituida y por constituir, sea total, sea parcialmente. Si abro la Constitución del Estado, no encuentro en ella una sola palabra que pueda servir de guía en tan intrincado laberinto, y no sé yo como podrían legitimarse unas disposiciones de esta naturaleza.

Los poderes constituidos están dentro del círculo de la ley fundamental del Estado; dentro de ese círculo yo no veo salida a ninguna de las dificultades propuestas, y es quimérico el aspirar a vencerlas conservando una estricta legalidad. La razón es muy sencilla: cuando los poderes constituyentes, cumplida ya su misión providencial, abandonan la escena política, no solo se retiran de ella, sino que se extinguen, se anonadan, y sería inútil ya buscarlos en la sobreabundancia de la tierra. ¿Que es lo que queda? ¿Que la sociedad abandonada y en un absoluto desamparo? De ningún modo: la sociedad queda bajo la tutela de los poderes constituidos; y estos poderes no podrán subvenir a todas las necesidades en que el país se encuentre? No y mil veces no; el poder constituyente ha desaparecido completamente; no hay nadie que según la Ley fundamental ni otra secundaria, pueda llamarle de conveque, si cercenais las facultades de la autoridad única que funciona y puede funcionar al frente del país, cundirá el conflicto, y tendremos, ó bien que entregar la sociedad al desorden y a la anarquía, ó bien que desplegar una acción saludable y protectora.

No quiere decir esto que los poderes constituidos puedan jugar con las instituciones que acaban de ver la luz, no; eso sería un nuevo llamamiento al desorden; eso sería arrostrar temeraria y audazmente una sanción formidable, pues nadie ignora que es hoy de todo Gobierno tiránico engendrar la reacción que ha de hundirle en el descrédito y acabar luego con su existencia.

Quiero por lo tanto la puntual observancia de las leyes; quiero que sean respetadas como un sagrado; pero quiero tambien que bajo el apuro de la necesidad y guardando las formas establecidas, se considere revestido de todo el lleno de la autoridad que requiere el bien y la conveniencia pública.

Señores: estas observaciones que no he permitido hacer tan rápidamente, conviene que sean robustecidas con ejemplos de la autoridad y eficacia. Con frecuencia se acude a las costumbres parlamentarias de Inglaterra, cuna del gobierno representativo; con frecuencia se acude tambien a las de Francia en sus tiempos, ya de la restauración, ya de la monarquía de Julio; y no deja de darse por este medio, grande autoridad y esclamamiento a las demostraciones.

Pues bien: siguiendo yo esa senda, que encuentro tan trillada, pregunto con franqueza al Sr. Rivera: cuando el bill de reforma en Inglaterra cambió la faz de aquel gobierno representativo, desde que lo inició Lord John Russell hasta que Lord Grey tuvo el gusto de verlo sancionado. ¿Qué Cámaras constituyentes se reunieron en aquella nación? Ningunas: las Cámaras existentes fueron las que entraron en la discusión y votación de tan gran reforma, y sabido es que ese bill costó la disolución de la Cámara de los Comunes y obligó a Guillermo IV a amenazar con un cambio de mayoría al alto Cuerpo, ó sea al de los Lores. Pero no se salió nunca de la marcha regular y ordinaria, ni se levantó si quiera una sola voz en favor de esos poderes que echó aquí menos el voto particular.

Lo mismo podemos decir de Francia: cuando en 1812 tuvo la desgracia esa nación de perder al Duque de Orleans, mientras Luis Felipe, ese Monarca prudente y previsor, con una mano se enjugaba las lágrimas que le arrancaba la memoria de su hijo, firmaba con la otra la convocatoria de las Cámaras francesas. ¿Para qué? Para la formación de la ley de Regencia. Precisamente la ley de Regencia era urgente en aquellos momentos, porque a Luis Felipe no se le podía ocultar que, muerto el Duque de Orleans, estaban en el trono un anciano y a su inmediación un niño, y era indispensable proveer lo necesario a una minoría inminente.

El día 13 de Julio de 1812 me parece murió el Duque de Orleans, y las Cámaras fueron convocadas para el 26 de mismo mes, y esto solo basta para persuadir, cuando no fuese una cosa sabida de todos, que eran ordinarias y no constituyentes. A ellas presentó el célebre Guizot la ley de Regencia; ellas las discutieron y votaron; y el resultado es que los Cuerpos colegisladores ordinarios, los que estaban nombrados para los asuntos comunes del Estado, esos fueron los que dotaron a la Francia de un Estatuto tan importante y sobre todo tan eminentemente constitucional.

Véase pues a esta dos países que tanta ventaja nos llevan en la senda de las instituciones representativas y tan celosos son de sus franquicias, véase cómo no han pensado siquiera en poderes constituyentes, cuando se ha tratado de las mas altas y trascendentales instituciones.

Presumo que el Sr. Rivera se cree escudado con una opinión que ha prevalecido alguna vez y que destruye por su base todos mis argumentos; presumo que le basta pronunciar una palabra para hacerme enmudecer: esa palabra será la de autorización.

Díra el Sr. Rivera; no, yo no quiero Cortes constituyentes provocadas por un cataclismo social; estoy lejos de semejante propósito. Lo que quiero únicamente es que en la convocatoria se prevenga al colegio electoral que los Diputados vengán autorizados para introducir una reforma en la Ley fundamental. Con esto tenemos los poderes debidamente facultados y sin riesgo de cometer una grave infracción. Si es esta la observación aludida, si es esto todo lo que ha discurrido S. S. permítame le diga que padece en mi pobre opinión un error mayor que el anterior; y si para rebatir aquel he necesitado algunas reflexiones, para este me bastan muy pocas, ó quizás una sola expresión.

¿A quién se dirige esa convocatoria? Al colegio electoral. ¿Y se halla este facultado para alterar el Código fundamental? ¿Dónde y cómo? Pero subamos mas arriba. ¿Qué es el colegio electoral? El colegio electoral, Sr. Rivera, es un cuerpo constituido; y como producto de la Constitución del país no puede salir de la esfera de sus atribuciones: ¿cómo pues se le atribuyen sin reparo alguna facultades que se niegan con tan decidido empeño al Parlamento compuesto de la Corona, del Senado y del Congreso? ¿Cree que no he exagerado cuando he dicho que a las últimas observaciones de S. S. bastaba oponerles una sola palabra: ya ve S. S. que sin un trastorno social no es posible la convocación de un poder constituyente; y si el queda expuesto era el gran pensamiento del autor del voto particular, convénzase el Congreso que es el mas débil, el mas inconducente que cabe discurrir; yo por lo menos no conozco otro.

Se dirá acaso: pues ¿qué es entonces la autorización que puede dar y ha dado el hecho alguna vez el colegio electoral? ¿Qué? Lo diré sencillamente: es la apariencia, la ficción y la fantasmagoría; pero nunca una razón legal.

Voy a concluir esta parte resumiéndola en breves palabras: en mi humilde concepto, señores, la Corona con los Cuerpos colegisladores forman el poder social organizado. Fuera de él no hay sino usurpación ó revolución; y, señores Diputados, sabido es que la revolución no se reglamenta. La revolución solo tiene por árbitro a Dios; así como le tienen todas las tormentas.

Vamos a la otra aserción de S. S.

Es cierto que hay contravención de la Constitución del Estado en el proyecto presentado por el Gobierno? ¿No es esa una exageración,

si no tan notable, a lo menos que puede ponerse en competencia con las anteriores?

Para probarlo así empezaré recordando las palabras pronunciadas por el Sr. Olózaga al discutirse el proyecto de Constitución en el año 1837.

“Y Conviene, decir el Sr. Olózaga, que quede (el artículo) como está, porque de esta manera puede comprender todos los casos, y porque además al darse las leyes constitucionales de un país cualquiera, en vez de hacer limitaciones, debe procurarse extender el derecho de ciudadanía sin perjuicio de que se restrinja luego si pareciese conveniente por las leyes civiles.”

Varias consecuencias se deducen de aquí primero, que el mismo individuo de la comisión, que se puede decir que era el principal de ella, el Sr. Olózaga, conocía que se daba demasiada extensión al derecho de ciudadanía y dejaba la facultad de restringirla a las leyes civiles; porque al fin ahí estaban las leyes civiles, que eran las que habían de restringir este derecho de ciudadanía de que se trataba. De manera que los autores mismos de la Constitución, acerca de los derechos de naturaleza, dijeron que era asunto de leyes civiles y eso que estaban escribiendo en la Constitución del país esos principios contra los cuales las queridos levantaron el Sr. Rivera.

Pero ahora prescindamos de esto. ¿Qué entendieron decretar las Cortes constituyentes? ¿Entendieron que imponían a los países extranjeros la obligación de respetar los derechos que ellos declaraban aquí? Esto sería una ofensa a la ilustración de aquellas Cortes.

Para que se vea cuál era el espíritu y tendencia de aquellas disposiciones, conviene buscar el mas genuino de sus comentarios; y tal comentario se encuentra en las opiniones de los individuos de la comisión, porque son de grande importancia, porque bajo su interpretación votó el Congreso aquellas disposiciones. De manera que la discusión duró mientras está alcanzó a satisfacer todos aquellos repartos que podían presentarse, y se vino a votar bajo la interpretación que dió la comisión a las mismas palabras que contenían su proyecto.

“A mí me suena, decía el Sr. Ayllon, que los hijos míos tienen los derechos de ingleses: llegará un día en que teniendo uso de razón, si están en España, no usará de aquellos derechos, pues tendrán mucho honor en llamarse españoles; pero si las circunstancias los obligan a pasar a Inglaterra, podrán hacer uso de los derechos que ya tienen. Por este artículo no se priva a ninguno de los extranjeros del derecho de pertenecer a su nación. El declarar que tienen el derecho de españoles los que nacen en España, no lleva consigo carga ninguna, no lleva obligación de renunciar a ser españoles ó franceses; llevan la facultad de que cuando lleguen a la mayor edad puedan preferir los derechos que mas les convengan.”

Tambien son notables las palabras del Sr. Sanchez. Dijo este: “Una de las objeciones del Sr. Alarcon es que el hijo del embajador francés que nace aquí se le obligará a ser español.”

Y mas adelante: “La Constitución del 12 no tenía esta expresión; pero es necesaria en la actualidad. El Sr. Ayllon ha tenido dos hijos en Inglaterra, y otros españoles los han tenido en aquel y en otro reino. Estos hijos se hallaban fuera de la ley. La Constitución que se discute hace esta expresión necesaria por el considerable número de hijos de los distinguidos españoles que durante once años se han visto proscritos y perseguidos; y aunque hemos tenido que refugiarnos a naciones extranjeras, jamás hemos pensado en renunciar la nacionalidad de españoles.”

Fijémosnos por último en lo que manifestó el Sr. Olózaga: “En el párrafo anterior hemos declarado que los hijos de los españoles residentes en el extranjero con cualquier motivo son españoles. Por ejemplo, el que nace en Inglaterra hijo de español, es español. Las leyes de aquel país lo hacen inglés; ¿y qué sucederá? Que si viene a España quieró ser inglés, será inglés, y si quiere establecerse aquí y ser español, lo será sin necesidad de carta de naturaleza.”

Tambien expuso a continuación el propio Sr. Olózaga que en cuanto a las dos naturalezas de inglés y español convenía con el Sr. Diaz, y creía que el que se halla en este caso tendría en que escoger según le pareciese ó acomodase. Se ve por consiguiente que en la Constitución de 1812 no se ponía ese párrafo que dá la calidad de españoles a los hijos de españoles nacidos en territorio extranjero, y que se introdujo ese artículo en la Constitución actual porque acababan de llegar de la emigración infinitos españoles a quienes había ahuyentado la persecución que sufrían; y que habiendo tenido numerosos hijos en el extranjero, se quería que la patria les abriese los brazos. Tal fué el objeto de ese artículo; y yo pregunto ahora al Sr. Rivera: ¿qué decretaron las Cortes en 1837? ¿Declararon un derecho de naturaleza tal que hiciese desde luego españoles a los hijos de españoles que nacen en el extranjero? No, señores; lo que decretaron fué un derecho de opción, y nada más que un de-

ia natural abie

